

Globethics Repository

The logo for Globethics, featuring the word "Globethics" in white, sans-serif font centered within a solid blue rectangular background.

Nicaragua 2001

This page was generated automatically upon download from the Globethics Repository. More information on Globethics see <https://www.globethics.net>. Data and content policy of Globethics Repository see <https://repository.globethics.net/pages/policy>.

Item Type	Article
Authors	Ortega Hegg, Manuel
Publisher	Fundación Friedrich Ebert (FES)
Rights	Creative Commons Copyright (CC 2.5)
Download date	2026-07-08 08:43:09
Link to Item	http://hdl.handle.net/20.500.12424/218979

Nicaragua 2001. Un gobierno sin partido

Manuel Ortega Hegg

El 4 de noviembre de 2001 se realizaron en Nicaragua elecciones generales de presidente, diputados nacionales (20), diputados departamentales y regionales a la Asamblea Nacional (70), y diputados al Parlamento Centroamericano para un periodo de cinco años (20). Este artículo pretende analizar estos resultados, identificar algunas lecciones y prever los escenarios poselectorales posibles. Estos comicios suceden a un año de las primeras elecciones municipales realizadas de forma separada de las generales. Los principales contendientes fueron el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), partido de origen izquierdista, el Partido Liberal Constitucional (PLC), de derecha, y el Partido Conservador (PC), de derecha oligárquica más tradicional.

Significado de las elecciones

Luego del reciente triunfo de Enrique Bolaños, el análisis indica que la puja política ha venido asumiendo la forma de una polarización electoral relativamente normal, a diferencia de elecciones anteriores donde aquélla presentaba raíces sociales y económicas que excedían el campo político-elec-

toral. Esta es una tendencia positiva que coincide con el creciente aumento de la tolerancia, observada en estudios recientes¹. En efecto, por vez primera en la historia cercana en estas elecciones no se discutieron ni se jugaron objetivos extraelectorales, como sí ocurrió en 1990 y 1996. Cabe recordar que con el derrocamiento insurreccional de la dictadura somocista en 1979, se

Manuel Ortega Hegg: sociólogo nicaragüense, director del Centro de Análisis Socio-Cultural (CASC-UCA), de la Universidad Centroamericana.

Palabras clave: elecciones, proceso político, sistema político, Nicaragua.

instauraba en Nicaragua un nuevo régimen revolucionario sandinista que pretendía reorientar el país hacia un modelo definido por los mismos revolucionarios como de «aspiración socialista». La guerra contrarrevolucionaria organizada y dirigida por Estados Unidos, iniciada tempranamente y que se extendió durante la década de los 80, desangró y empobreció al país y tensionó extraordinariamente las posibilidades de transformación al tener que destinar los recursos a las labores de defensa. Las elecciones de 1990 se convirtieron así en una especie de referendo para determinar si se continuaba con la búsqueda de un modelo alternativo de sociedad con todas sus dificultades, el acoso imperial y la guerra consecuyente, o si el país retornaba a la paz, lo que significaba volver al redil de los países de regímenes típicamente capitalistas. El resultado fue la derrota de la opción revolucionaria.

Las elecciones de 1996 también supusieron objetivos extraelectorales, al incluir el debate de la propiedad. Esto surge del trastocamiento provocado por las reformas agrarias y urbanas de la época revolucionaria sandinista, que redistribuyeron la propiedad entre miles de nicaragüenses desposeídos. Intentos de ordenar este proceso y de reconocer derechos de expropiados se iniciaron con el gobierno surgido en

1990, lográndose una ley con un buen nivel de consenso. Sin embargo, para 1996 el sector más derechista representado por el candidato liberal Arnoldo Alemán pretendió desconocer esta norma, planteando en su plataforma revisar el problema. Otra ley de consenso con el nuevo gobierno surgido en 1996 ha permitido avanzar sustantivamente en la resolución de este asunto. Hoy el problema de la propiedad es más bien residual en Nicaragua.

En las elecciones de noviembre de 2001 no se debatieron modelos de sociedad como en 1990, ni estuvo en discusión «el tuyo y el mío» como en 1996. Los programas electorales de las principales fuerzas tenían planteos similares, con énfasis distintos: combatir el desempleo y la corrupción, mejorar la situación en el campo, impulsar la iniciativa privada como eje del desarrollo, no apartarse de los programas del FMI y seguir los dictados de los organismos financieros internacionales. No había ningún planteo alternativo. Tal vez por vez primera los nicaragüenses, no obstante los miedos de última hora, se asomaron a unas elecciones en donde la venta de las propuestas programáticas de partidos y candidatos se asimilaban a las de cualquier otra elección en un país periférico. Pero no puede obviarse que el peso del pasado con viejos resabios y alineamientos de los años 80 parecieron resurgir en un segmento de electores, lo que sin duda tuvo una enorme importancia en el re-

1. Cf. M. Ortega Hegg: *Cultura política, gobierno local y descentralización en Nicaragua*, Flacso / CASC / UCA, San Salvador, 2001.

sultado final de la contienda. Sin embargo, al menos unos 500.000 votantes nuevos sobre más de dos millones de electores no hacían ninguna referencia al pasado ni se alineaban ideológicamente con los contendientes. Ello representó un nuevo reto para los partidos políticos. Esta situación cambió el sentido y la profundidad de la polarización política, que derivó más de los diseños de propaganda y publicidad de los partidos que de bases materiales objetivas que polarizaran de antemano el espectro electoral.

El contexto institucional electoral

Los comicios tuvieron como marco un nuevo sistema electoral derivado del pacto bipartidista del FSLN y el PLC. Este nuevo esquema estuvo diseñado para excluir a potenciales competidores de estas dos fuerzas. Se establecieron excesivos requisitos para el registro de partidos y candidatos, y se exigieron elevados resultados para mantener la personería jurídica. La necesidad de firmas equivalentes a 4% del padrón de electores para registrar un partido, y 4% adicional para los candidatos, colocaba a las organizaciones pequeñas en dificultades casi insuperables. Ello se agudiza si se toma en cuenta que posteriormente el Consejo Supremo Electoral (CSE) determinó que las firmas no podrían repetirse con las de ningún otro partido y que el proceso de revisión podía anularlas –como de hecho ocurrió– por ilegibilidad, repetición en otras listas, cambio de trazos,

incoincidencia con la firma de la cédula electoral, etc. Por otro lado, el sistema de financiamiento fue cambiado a un acto *ex-post*. El reembolso de gastos de campaña de los partidos fue condicionado a obtener como resultado 4% de los votos, dejando así de lado a las organizaciones con insuficientes recursos financieros. La aplicación política y poco profesional de estos requisitos y la amplia discrecionalidad que la ley le otorga al organismo electoral, trajo como resultado la eliminación de todos los competidores de los partidos del pacto –salvo una agrupación, el PC. La oferta electoral se redujo de 25 opciones en 1996 a solo tres en las elecciones de 2001.

Pero el pacto también implicó cambios sustantivos en la integración del organismo electoral. Este acuerdo bipartidizó al CSE, estableciendo una composición partidaria en detrimento de la profesionalidad. Esta bipartidización arranca de las juntas receptoras de votos hasta la cúpula del sistema. El antecedente negativo de este modelo se evidenció en las elecciones municipales de noviembre de 2000, cuando por desacuerdos políticos de los partidos no se lograron obtener resultados oficiales sino hasta un mes después de los comicios, luego de negociaciones entre cúpulas. En estas pasadas elecciones generales la composición poco profesional del CSE se reflejó en la discusión sobre las asignaciones de escaños de diputados, donde primaron más los criterios político-partidarios

que los técnico-profesionales, y que provocó una importante crisis institucional. La nueva integración del organismo electoral desnaturaliza a la institución, haciéndola menos creíble y más costosa. Las encuestas preelectorales señalaban que casi la mitad de los votantes desconfiaba del CSE. Por otro lado, según datos preliminares, el costo de las elecciones de 2001, con menos partidos contendientes, subió en más del doble comparado con el de las elecciones de 1996.

Los resultados electorales en el entorno de Nicaragua

Los resultados dieron una rotunda victoria al candidato del partido de gobierno (PLC) y una Asamblea Nacional

constituida por mayoría de diputados leales a Arnoldo Alemán, presidente saliente. Datos del CSE señalan que las presidenciales arrojan 56,28% de votos a favor del PLC y 42,34% para el FSLN. El significado de las cifras en el contexto de la democracia electoral reciente se sintetiza en el cuadro.

Como puede observarse en el cuadro, el FSLN había venido perdiendo votos desde 1984, cuando obtuvo 67%. La pérdida más dramática la sufrió en 1996, cuando consiguió casi 38%. En 1990 había alcanzado casi 41%, y en 2001 repunta a 42%. Sin embargo esta suba resultó insuficiente para ganar en un espectro electoral bipartidista. El partido ganador obtuvo 56% de los votos, una victoria contundente de 14

Cuadro
Nicaragua
Resultados de elecciones presidenciales por partidos y alianzas de partidos
(1984, 1990, 1996 y 2001)

Elecciones	Partido 1	Partido 2	Partido 3	Otros
1984	FSLN	PCDN	PLI	
	735.967 66,97%	154.327 14,03%	105.560 9,60%	103.079 9,40%
1990	UNO	FSLN	MUR	
	777.552 57,74%	579.886 40,82%	16.751 1,18%	28.816 3,26%
1996	AL	FSLN	CCN	
	896.207 50,99%	664.909 37,83%	71.908 4,09%	64.015 7,09%
2001	PLC	FSLN	PC	
	1.216.863 56,28%	915.417 42,34%	29.933 1,38%	

UNO: Unión Nacional Opositora; PCDN: Partido Conservador Demócrata de Nicaragua; PLI: Partido Liberal Independiente; MUR: Movimiento de Unidad Revolucionaria; CCN: Camino Cristiano Nicaragüense; PLC: Partido Liberal Constitucionalista; PC: Partido Conservador.

Fuente: elaboración propia según datos del Consejo Supremo Electoral.

puntos de diferencia sobre el FSLN. Así, como resultado del pacto PLC-FSLN, los votos se concentraron en ambas opciones. El FSLN obtuvo la mayor votación desde 1984, sobrepasando 40% de los votos, lo mínimo para ganar en la primera vuelta; sin embargo, el cálculo errado no estuvo en ese repunte sino en la vulnerabilidad de su candidato ante los electores. Ello le facilitó al oponente obtener la mayor votación que un partido o alianza de partidos hubiera obtenido contra el FSLN (56%). Dada la fortaleza y amplitud de su voto orgánico, el FSLN suele comenzar las campañas electorales con un piso alto (por encima de 24%), pero su techo final es más bien bajo, comparado con sus adversarios. Por el contrario, las opciones antisandinistas o no sandinistas suelen comenzar con un piso bajo (por debajo de 18%), pero en todos los casos han mostrado tener la posibilidad de un techo bastante más alto que el FSLN, resultando finalmente vencedoras. El resto de votos en su inmensa mayoría no son orgánicos de ningún otro partido político. Una parte de este voto suele redistribuirse entre otras opciones. En este caso, como efecto del pacto bipartidista, los votos tendieron a concentrarse en ambas opciones, elevando el techo de los dos partidos, pero nuevamente se mantuvo la tendencia a que éste fuera más alto en el caso del candidato del PLC. En las elecciones para diputados, el PLC obtuvo un total de 53 diputados, el FSLN, 38, y el PC apenas 1. No obstante, ningun-

no de los partidos tiene la mayoría calificada que requieren las grandes decisiones del país, incluyendo una reforma constitucional.

Estos resultados parecieron sorprendidos para la mayoría de los analistas políticos y encuestadores, que auguraban un final cerrado. Fundamentalmente pesaban en estas consideraciones dos hechos: en primer lugar, los resultados de las elecciones municipales de un año antes (noviembre de 2000), cuando la diferencia a favor del PLC fue de apenas 1%; el FSLN había ganado 11 de las 17 plazas electorales más importantes del país, incluyendo Managua. En segundo lugar, las intenciones manifiestas de quienes declaraban en las encuestas que iban a votar. Hasta casi último momento, la intención de voto favorecía en su mayoría al FSLN y en algunas pocas encuestas finales al candidato del PLC. Sin embargo, quienes tuvieron la palabra final fueron los que no se abstuvieron y mantuvieron oculta su intención de voto hasta las elecciones. El porcentaje de ambos grupos estaba entre 12% y 18% según las diferentes encuestas. Casi unánimemente estos dos segmentos votaron en contra de Daniel Ortega.

Algunas lecciones

La vulnerabilidad del candidato sandinista. Los resultados electorales brindan algunas lecciones importantes para los partidos de origen izquierdista. La primera es que debe democratizarse la

elección de candidatos en el interior de las agrupaciones. La debilidad del candidato del FSLN aparece como una lección no aprendida por el partido en el contexto histórico de la democracia nicaragüense, dada la persistencia del propio Ortega para mantenerse como candidato. Tres derrotas sucesivas permiten observar que su liderazgo consigue el voto unánime en las filas sandinistas, aunque sin obtener éxito con el voto no sandinista. Por otra parte, Ortega tiene la virtud de facilitar la polarización por su controversial papel durante los años que estuvo frente al gobierno revolucionario en la década de los 80. En esa polarización resulta perjudicado al aglutinar todo el voto no sandinista y antisandinista en su contra. Según encuestas, más de 42% del electorado manifestó expresamente la intención de no votar por Ortega bajo ninguna circunstancia.

Así, una parte del voto a favor del candidato liberal reflejó el llamado «voto del miedo» a un eventual regreso al poder de Ortega. Ese sentimiento tiene que ver con el temor del electorado de verse nuevamente confrontado a situaciones parecidas a las de la década de los 80 (enfrentamiento con Estados Unidos, desestabilización y guerra, escasez y racionamiento, atentados a la propiedad y la libre empresa, servicio militar y alto desempleo). Pero además Ortega suele ser blanco seguro de tres grandes electores ya tradicionales: la embajada estadounidense; la posición antisandinista del líder de la Igle-

sia católica en Nicaragua, cardenal Miguel Obando y Bravo; y la empresa privada. Los medios de difusión, salvo excepciones, estuvieron menos polarizados que en comicios anteriores.

La embajada norteamericana –bajo orientaciones del Departamento de Estado– se encargó en distintos momentos de la campaña de dejar muy en claro que Ortega no era amigo de EEUU, y también que el FSLN había sido amigo de terroristas internacionales; más aún, durante su gobierno este partido había sido enemigo de la democracia, la libre empresa y la economía de mercado, y hasta ahora no había señal clara alguna de que ello hubiera cambiado. El mensaje era que en caso de llegar nuevamente al poder, EEUU se reservaba el derecho de revisar su cooperación con Nicaragua, totalmente dependiente de la ayuda internacional. La Iglesia católica se encargó de convertir en pecado mortal la abstención electoral, lo que favorecía al disciplinado voto sandinista. En una carta pastoral de un mes antes de las elecciones, orientó a sus fieles sobre el tema y señaló muy claramente no solo el deber de votar sino por quién hacerlo (Bolaños, católico) y por quién no (Ortega, ateo). Ello fue reafirmado en una homilía del prelado en una misa el día previo a las elecciones, transmitida por cadena de radio y televisión. Por su parte, la iniciativa privada organizada tomó claro partido por el candidato del PLC, presidente del gremio empresarial en la década sandinista. Durante el

periodo electoral mantuvo en suspenso y al mínimo la actividad económica y las nuevas inversiones hasta no conocer los resultados electorales. Una parte de los depósitos bancarios se fugaron del país y otros quedaron en puerta, listos para fugarse en caso de una victoria de Ortega. Finalmente, el candidato sandinista se presentó a estas elecciones con un expediente negativo en términos personales y familiares: pendía sobre él la acusación de abuso y violación interpuesta por su hijastra, Zoila América Narváez –respondida a la fecha solo por la esposa de Ortega, quien había enfrentado la acusación evadiendo el fondo y blandiendo sus fueros como diputado. Es difícil predecir el comportamiento del electorado con un candidato del FSLN distinto a Ortega, pero dos fallidos intentos anteriores anunciaban muy claramente una lección que no convenía dejar de lado para esta tercera ocasión.

La convergencia. El FSLN quiso superar la vulnerabilidad de su candidato a través de una alianza. Buscó sumar votos a través de la creación de una convergencia de organizaciones políticas, pequeños partidos y personajes notables, como Antonio Lacayo, yerno y hombre fuerte del gobierno de Violeta de Chamorro. Incluyó en la fórmula como candidato a vicepresidente a Agustín Jarquín, ex-contralor de la República y miembro de la Unidad Social Cristiana. Es probable que parte del crecimiento de votos que experimentó el FSLN en esta elección se

explique por esta alianza. Sin embargo, a diferencia del PLC, el sandinismo no ofertó escaños parlamentarios a sus aliados; solo cargos en un eventual futuro gobierno. Esto hizo poco atractiva la alianza para los socios y el mismo electorado.

Credibilidad y marketing político. Sin embargo, estos motivos no son suficientes para explicar la derrota del FSLN. Otros factores internos tienen una cuota importante. Pueden sintetizarse diciendo que el candidato sandinista fue menos creíble que el del PLC. La estrategia de marketing político para instalar favorablemente su imagen en el electorado no logró convertirlo en una opción creíble ni contrarrestar la campaña sucia de sus adversarios. Frente a un Ortega presentado como campeón de la paz y el amor, la campaña sucia del PLC aprovechó la vulnerabilidad del oponente de diversas maneras. Pasó imágenes televisivas recordando los distintos «disfraces» de Ortega: en traje de faena militar en la década de los 80, de inmaculado blanco durante la campaña electoral de 1996, y de flores psicodélicas en la de 2002; esto producía el efecto, deseado por sus adversarios, de dudar acerca del perfil pacífico y conciliador de la actualidad. Por su lado, la carta pastoral de los obispos ordenaba a los feligreses analizar la trayectoria de los candidatos antes de emitir el voto, y considerar también si su pasado avalaba sus actuales posiciones. Ello se combinó con imágenes de Ortega con Muhamar Kadafi,

Fidel Castro, Manuel Marulanda «Tiro Fijo» y otros líderes semejantes, algunos de ellos en la lista norteamericana de terroristas internacionales. Pero tampoco el diseño de la campaña logró credibilidad y confianza en el electorado. Grandes rótulos en las carreteras con flores psicodélicas y mensajes tipo «Puede más el amor que el odio» o «Daniel, el camino del amor», y su lema central «La tierra prometida», no terminaron de convencer al electorado. Peor aún cuando el FSLN abandonó su rojo y negro por amarillos, anaranjados y otros colores, abjurando de la simbología tradicional.

El abandono del rol de opositor. El pacto del FSLN con el PLC significó también compartir responsabilidades en las principales instituciones del Estado donde el sandinismo obtuvo representación. Aunado a ello, el FSLN exhibió una total falta de energía para denunciar la galopante corrupción del Gobierno. En la percepción ciudadana el FSLN no se diferenciaba de sus adversarios en sus principios y comportamientos éticos. Más aún, en algunos casos se le percibió más como cómplice de los abusos de poder y falta de transparencia que como crítico. Tampoco se le vio luchando por hacer avanzar posiciones alternativas a la agenda gubernamental. De esta manera, apareció ante el electorado como un partido de corte tradicional, más preocupado por los beneficios de sus elites políticas que por concertar desde la oposición un programa de transforma-

ciones en beneficio ciudadano. Ello tiene que ver con una tensión no resuelta en el FSLN: lograr establecer una estrategia que tome en cuenta la lucha electoral periódica con un programa de transformaciones permanentes de más largo plazo. El sandinismo parece así tener extraviado el rumbo estratégico y haberse sumido en la lucha electorera inmediateista.

¿Un gobierno sin partido?

La presente coyuntura podría colocar nuevamente en la historia del país a un Ejecutivo sin partido frente a una doble oposición fuerte (PLC y FSLN) en el Poder Legislativo. Bolaños tiene sus orígenes políticos en el PC y no fue hasta 2001 que se afilió formalmente al PLC que lo llevaría al poder. El antecedente de una experiencia similar con Violeta de Chamorro, candidata independiente y sin militancia partidaria que accedió al Gobierno (1990-1996) a través de la Unión Nacional Opositora (UNO), y terminó gobernando con el apoyo del FSLN, partido de oposición. Las diferencias sin embargo son evidentes. Señalaremos al menos dos. La primera está en la fortaleza del liderazgo alternativo al Poder Ejecutivo en el vehículo partidario que lo llevó al poder. El predominio del PLC en manos de Alemán es fuerte. No se compara con un liderazgo similar en la desaparecida UNO en 1996. Más aún, el resultado electoral de 2001 lo ha fortalecido aún más, dado que se instala como el líder victorioso de la

apuesta que significó el pacto entre el PLC y el FSLN.

Una segunda diferencia tiene que ver con la actual debilidad institucional del Estado, comparada con la del gobierno de Chamorro. Esa debilidad convierte al líder del PLC en una figura muy fuerte también dentro del Estado, dada la gran ascendencia que el pacto le ha dado sobre los miembros de los otros poderes, luego que éstos han sido bipartidizados. Recordemos que el pacto establece una bipartidización del Poder Judicial, el CSE y la Contraloría General de la República, con ventajas para el partido de gobierno en la composición de estas instancias y organismos. La Asamblea Nacional estaba ya bipartidizada por el nuevo diseño de asignación de escaños —que fortalece a los partidos mayoritarios y el bipartidismo— a diferencia de la ley electoral anterior que favorecía a los partidos minoritarios.

La crisis manifestada en estos últimos años en las diferentes instituciones afectadas por el pacto coloca la profesionalización del sistema político como una tarea urgente e ineludible para el nuevo periodo de gobierno.

Los escenarios poselectorales

1. El bloque dominante constituido por el nuevo grupo en el poder, el PLC, la Iglesia, la empresa privada y el Departamento de Estado, se mantiene unido e impulsa un programa de gobier-

no liberal. Ello supone una armonía entre el Ejecutivo y la bancada parlamentaria liberal, y un fuerte apoyo de la actual administración norteamericana y la Iglesia. En este escenario podrían preverse algunos problemas, como la exclusión de la oposición, el rechazo de demandas de sectores no liberales ni sandinistas en el programa de gobierno, lo que podría generar tensiones y conflictos con los excluidos, en una situación que requiere el máximo de unidad nacional para afrontar la grave situación heredada. Frente a este escenario existen riesgos de conflictos por hegemonías en el interior del grupo dominante, expresado en el control real del aparato partidario y de gobierno, que tiene como trasfondo las ambiciones expresadas por Alemán (actual presidente de la Asamblea Nacional) de aspirar de nuevo al poder en 2006, pero también en algunas medidas relacionadas con la preeminencia de la institucionalidad por encima de los liderazgos unipersonales caudillistas y autoritarios, así como la promesa del gobierno entrante de investigar todos los casos de corrupción de las gestiones anteriores, incluyendo la del liberal Alemán.

2. El Ejecutivo se alía con el FSLN. En este escenario, se prevé un desenlace de ruptura en el bloque victorioso, producto de la irresolución de las contradicciones anteriores. Esa ruptura supone la creación de una bancada parlamentaria favorable al Ejecutivo, que aliada a la bancada sandinista le permita go-

bernar con una agenda más amplia que el programa liberal.

3. Podría surgir de la actualización y profundización del pacto político del FSLN y Alemán. Temas como la revisión de la ley de inmunidad, la revisión de algunos casos referidos a la propiedad que afectarían al FSLN, la institucionalidad como amenaza a los poderes unipersonales de los líderes del PLC y el FSLN y la lucha contra la corrupción por el nuevo gobierno, podrían alentar esta alianza. Este escenario implicaría una gran incertidumbre para el país. Cabría esperar desde reformas constitucionales y electorales hasta la convocatoria de una Asamblea Constituyente. El escenario sería igualmente desfavorable a la opinión pública y sectores organizados de la sociedad civil y los gobiernos locales, dejando poco espacio para su incidencia.

4. Menos probable es la conformación de un amplio proceso de concertación nacional que incluya a todas las fuerzas del país. En este caso, propuestas como la del Consejo Nacional de Planificación Económica y Social (Conpes) de una visión de nación compartida y de propuestas de actores como el FSLN, en el mismo sentido, podría facilitar un gobierno con un amplio consenso y muy abierto y sensible a todos los sectores. En este escenario, las condiciones para el avance de un proceso descentralizador podría ser más sustantivo que en cualquiera de los casos anteriores. El hecho de que en la con-

tienda electoral los programas de los candidatos prácticamente coincidieran, no habiendo más diferencias que de matices, como lo ha señalado el mismo Ortega, hace más viable este escenario. El avance de posibles procesos de reinstitucionalización concertada establecería un marco ideal para el avance de la gobernabilidad democrática y procesos como la descentralización del Estado. Ese mismo marco sería un marco ideal para la democratización y modernización de los partidos políticos. Abriría también espacios importantes de incidencia a la sociedad civil, gobiernos locales y otros actores favorables a la descentralización.

Finalmente, la situación de deterioro socioeconómico estructural generará una fuerte presión social para el cumplimiento de promesas electorales. Un mejoramiento en la situación económica –promesa fundamental del nuevo gobierno– tiene como supuesto la gobernabilidad democrática, el fortalecimiento institucional y la vigencia del Estado de derecho para la resolución de conflictos sociales, así como amplios mecanismos y espacios de inclusión de actores. Dadas estas premisas, y que desde el pacto político PLC-FSLN se han debilitado las instituciones y se ha afectado la certidumbre jurídica, las posibilidades de atracción de nuevas inversiones están dadas por la reversión del pacto. Ello pasa, sin embargo, por un acuerdo nacional. Ninguno de los dos partidos mayoritarios puede hacer reformas constitu-

cionales o electorales sin contar con el otro. Este reto se vuelve aún más urgente si se recuerda que el nuevo gobierno deberá enfrentarse a un entorno internacional más desfavorable, particularmente desde los sucesos del 11 de septiembre de 2001. La recesión económica afectará las exportaciones, y la guerra actual introducirá otro competidor por los cada vez más escasos recursos de la cooperación in-

ternacional. La rigidización de los factores político-ideológicos derivados de este enfrentamiento, con sus efectos en el periodo electoral en contra del FSLN, continuará repercutiendo en el campo político en este tramo poselectoral².

Sin embargo, la situación de un gobierno sin partido propio quizá podría facilitar la apertura a alianzas con la sociedad civil, los municipios, la cooperación internacional y otros actores. El reto está planteado.

2. En la campaña electoral, el PLC explotó la idea de un FSLN aliado al terrorismo internacional y, por tanto, sujeto a posibles represalias por el gobierno norteamericano.

Managua, enero de 2002

CUADERNOS AMERICANOS

Noviembre-Diciembre 2001

México

Nº 90

DE LA GUERRA FRÍA A LA GUERRA DE ODIOS: **Leopoldo Zea**, ¿Tercera Guerra Mundial? TESTIMONIOS: **Michelle Campagnolo Bouvier**, Carta imaginaria al presidente Bush. **Federico Mayor Zaragoza**, «Nosotros, los pueblos...». **Liu Chengjun**, No hay paz verdadera sin justicia real: carta a los estadounidenses. **Daniel Fernando Moore Merino**, Terrorismo: ayer, hoy y mañana. EL APORTE DE LATINOAMÉRICA Y EL CARIBE AL UNIVERSO DEL SIGLO XXI: **Abelardo Villegas**, Perspectiva de América Latina. **Estela Morales**, La universidad en América Latina ante los retos de la sociedad de la información. **Andrei Kofman**, Los estereotipos artísticos y la autoformación de la literatura latinoamericana. **Joaquín Sánchez Macgrégor**, Un enfoque crítico del bolchevismo en México y en Rusia. **Yamada Mutsuo**, XI Congreso de la Fiealc, Osaka 2003: palabras de aceptación. DESDE EL MIRADOR DE CUADERNOS AMERICANOS: **Carlos Véjar Pérez Rubio**, Entre el barro y el cristal: notas sobre la cultura ambiental, el sincretismo y la identidad cultural mexicana. **Guillermo Piña-Contreras**, El universo familiar en la formación intelectual de Pedro Henríquez Ureña. **Ricardo Llopesa**, Pablo Antonio Cuadra, poeta de la hispanidad. **Luis Quintana Tejera**, Mario Benedetti y la creación al servicio de una causa: «Escuchar a Mozart» y «Sobre el éxodo». **Buatu Batubenge Omer**, Los retos de la transhistoricidad de la racionalidad liberal. CRÓNICA: **Adalberto Santana**, Sesenta años de *Cuadernos Americanos*. RESEÑAS.

Cuadernos Americanos. Revista dedicada a la discusión de temas de y sobre América Latina. Suscripción por un año (seis números): US\$125. Redacción y Administración: 2º piso, Torre I de Humanidades, Ciudad Universitaria, 04510, México, DF. Telf.: (525) 622-1902; Fax: 616-2515. Giros: Apartado Postal 965 México I, DF.





